

Colombia

En el ojo del huracán

Eduardo Pizarro Leongómez

Dos acontecimientos llenaron de optimismo en 1998 a los colombianos respecto de una solución negociada al conflicto armado: la reunión del entonces recién electo Andrés Pastrana con el comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, y la reunión en Maguncia (Alemania) entre representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil y miembros de la cúpula del ELN. Un año más tarde cunde el pesimismo y la desesperanza. Negros nubarrones se ciernen sobre Colombia. Uno de los más graves son los riesgos de una creciente intervención de Estados Unidos en la guerra de contrainsurgencia. En este trabajo se analizan tanto la visión dominante en Washington como las líneas de su política hacia Colombia.

El eje estratégico de Colombia para poder enfrentar los desafíos del nuevo milenio es el logro de la paz interna. La violencia de múltiples rostros (criminalidad común difusa y organizada, guerrilla, grupos de autodefensa, narcoparamilitarismo rural) que afecta al país incide negativamente en todos los órdenes de la vida nacional. Según Gabriel Gaspar «Colombia es el escenario del conflicto más violento y generalizado que se vive en la actualidad en la región latinoamericana. En cualquier indicador que tomemos encontraremos que este país supera con creces otros conflictos de la región. Número de efectivos involucrados, bajas, número de desplazados, número y envergadura de los enfrentamientos, amplitud del teatro de operaciones, etc.»¹.

Ante este panorama se han multiplicado los calificativos en la prensa internacional para catalogar la situación colombiana: para algunos se trata ni más ni menos que de una suerte de «Vietnam latinoamericano», para otros una reedición de la guerra de Bosnia o simple y llanamente el «próximo Ko-

EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ: politólogo; director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia - Iepri; columnista del diario *El Espectador* y director de la revista *Análisis Político*, Bogotá.

1. Gabriel Gaspar: «Panorama de la seguridad regional en 1998» en *Fuerzas Armadas y Sociedad* 13(4), 10-12/1998, Santiago de Chile, p. 3.

Palabras clave: conflicto interno, política regional, EEUU, Colombia.

sovo»². ¿Son apropiados estos calificativos? En este artículo se intenta hacer una síntesis de la visión predominante sobre Colombia en los círculos gubernamentales de Estados Unidos, dado el papel estratégico de este país tanto en un eventual proceso de paz como en una escalada militar con fuerte presencia internacional. No hay duda de que en los últimos dos o tres años ha aumentado mucho la vulnerabilidad externa de Colombia como consecuencia de la percepción en Washington de que se trata no solo de un foco creciente de inseguridad para el hemisferio occidental, sino ante todo de un caso preocupante de hecatombe humanitaria. Dado que esta visión se está traduciendo en políticas concretas llevaremos a cabo una breve revisión de lo que denominaremos la «política de doble carril» de EEUU hacia Colombia.

Una amenaza regional

Colombia se encuentra en el ojo del huracán. Durante los últimos dos años se han efectuado, sólo en EEUU, tres reuniones de alto nivel en torno de nuestro conflicto armado. Dichas reuniones fueron organizadas por el establecimiento militar de ese país. La primera se llevó a cabo entre el 18 y el 19 de mayo de 1998 en Fort McNair (Washington), en la sede de la Universidad de la Defensa Nacional, promovida por el Departamento de Defensa. La segunda, en los primeros días de diciembre de ese mismo año en el Colegio de Guerra del Ejército en Carlisle (Pennsylvania), bajo los auspicios del Departamento del Ejército. Y finalmente, la tercera se realizó en mayo de 1999 en Washington, preparada por la Agencia Nacional de Inteligencia.

La percepción negativa con respecto a los conflictos que afligen a Colombia se vio agravada entre la primera y la segunda de las conferencias mencionadas. Mientras que en la reunión de Washington, Colombia fue percibida como un «país-problema» para la comunidad internacional, en Carlisle pasó a convertirse en un serio factor de desestabilización de la seguridad regional³. La reciente reunión en Washington tuvo un carácter distinto, dado que no se trataba de calificar el impacto del conflicto colombiano en la seguridad global o regional, sino de diseñar y discutir algunos escenarios probables de Colombia en los próximos años. No obstante esta especificidad, también estuvo dominada por una visión de tintes catastrofistas: salvo el escenario «pacto de paz», el resto («guerra total», «prolongación del conflicto» y «balcanización») evidenciaban un abierto pesimismo con respecto a las perspectivas futuras del país. Por ello, no es de extrañar que en numerosos círculos norteamericanos se hable sin tapujos de la eventualidad de un colapso total del Estado colombiano a mediano plazo.

2. «Los diplomáticos argentinos mejor informados venían anticipando que Colombia podría convertirse en el 'próximo Kosovo', es decir, en una región donde deberían actuar tropas extranjeras para sofocar una crisis interna» («Colombia: gestión de EEUU en la Argentina» en *La Nación*, 23/7/99, p. 3).

3. Gabriel Marcella y Donald Schulz: *Colombia's Three Wars: U.S. Strategy at the Crossroads*, Carlisle, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 1999.

Sin duda, estas preocupantes miradas reflejan la complicada situación, que podría verse reforzada si se continúa agravando el orden público interno y su impacto tanto regional como internacional. Desde hace ya algún tiempo, distintos funcionarios norteamericanos como el general Charles Wilhem —jefe del Comando Sur con sede actualmente en Miami—, han venido afirmando que Colombia constituye, hoy por hoy, el principal problema de seguridad para el hemisferio occidental, incluso por encima de Cuba, que ocupaba este no muy privilegiado lugar desde 1962. De ahí, el enorme valor estratégico de la política de paz.

Una nación altamente vulnerable. Colombia está en la actualidad mucho más expuesta a intervenciones de distinta especie por parte de la comunidad internacional que el resto de países del área. Se trata del único país de América Latina que no ha logrado resolver el tema más agudo de la agenda regional durante el periodo de la Guerra Fría (el conflicto contrainsurgente)⁴, y ya tiene encima los enormes desafíos de la nueva agenda de los años 90 (democratización, derechos humanos, criminalidad urbana, corrupción, pobreza, medio ambiente, desplazamiento de población). Esta superposición de desafíos del pasado y del presente agudiza al máximo la vulnerabilidad interna e internacional del país.

Vulnerabilidad que se ve reforzada por factores de orden geográfico y doctrinario. Por una parte, la compleja ubicación geopolítica de Colombia: un país a la vez caribeño y pacífico, andino y amazónico, próximo a la zona del Canal de Panamá y a la industria petrolera venezolana. Debemos recordar que en la concepción norteamericana sobre su *mare nostrum*, ésta ha dejado de limitarse solo al Caribe insular y centroamericano y se ha extendido hasta el mundo andino. De otra parte, en las fronteras de Colombia con los países vecinos no predominan las fronteras vivas —es decir, activas en términos de población e intercambio económico—⁵, sino las fronteras muertas, que pueden ser ocupadas como retaguardias seguras por actores armados no institucionales, así como utilizadas para el tráfico de armas y de drogas. Finalmente, el cambio de las doctrinas internacionales de la autonomía nacional al derecho de intervención por razones humanitarias hace de Colombia un candidato potencial para una intervención de la comunidad internacional. No solo posee una de las tasas de criminalidad más altas del mundo (75 homicidios por 100.000 habitantes), sino uno de los procesos de desplazamiento de población más preocupantes: más de un millón de personas en los últimos 10 años.

4. Si bien en Perú subsisten algunos núcleos senderistas aislados, este movimiento se halla en un estado de extrema debilidad. En el caso de los zapatistas mexicanos, se trata de una guerrilla de la pos-Guerra Fría con rasgos *sui generis*.

5. Salvo en algunas áreas fronterizas con Venezuela y Ecuador en donde existe una gran vitalidad comercial y cultural e importantes flujos de población, el resto (incluyendo casi todas las zonas de frontera con Brasil, Panamá y Perú), son regiones selváticas y escasamente pobladas.

¿Hacia un colapso total del Estado? Como ya mencionamos, en diversos artículos periodísticos se ha comparado el futuro de Colombia con la guerra de Bosnia o Kosovo en algunos casos, y en otros con la guerra de Vietnam. Una y otra comparación son, a mi modo de ver, equivocadas. Ni una confrontación de carácter étnico, ni una lucha que enfrentó a través de naciones superpuestas a las dos grandes potencias de la Guerra Fría, son equiparables a la experiencia colombiana. Sin embargo, es muy preocupante que estas visiones tengan un eco importante en la prensa mundial y ante todo, una influencia tan honda en sectores amplios del establecimiento militar y político de Washington⁶.

En estos círculos se ha vuelto ya común especular con respecto a la posibilidad de un derrumbe del Estado colombiano a mediano plazo. ¿Qué se entiende por esta noción? En revistas especializadas norteamericanas, especialmente provenientes del establecimiento militar, se ha buscado diseñar una matriz común de aquellos países en los cuales se ha producido un «colapso total del Estado», por ejemplo, Somalia, Afganistán, Bosnia-Herzegovina y Líbano. Nueve rasgos centrales fueron detectados en los cuatro casos: una fuerte presión demográfica, un movimiento masivo de refugiados, un crecimiento económico ligado a segmentaciones étnicas, una larga tradición de venganzas y represalias, una honda deslegitimación del Estado, una severa crisis económica, un progresivo deterioro o eliminación de los servicios públicos, una incapacidad manifiesta para implementar las normas legales y, por último, unos aparatos de seguridad operando como «un Estado dentro del Estado»⁷.

A pesar de la presencia de muchos de los rasgos de esta matriz en Colombia (por ejemplo, el brutal desplazamiento de población del campo hacia las ciudades o la presencia de poderosos escuadrones de la muerte) existe, sin embargo, una diferencia notable: en los cuatro casos mencionados habían fuertes identidades colectivas de índole étnica, lingüística, religiosa o ideológica. Debido a la ausencia de este factor es muy improbable, desde nuestra perspectiva, que se pueda producir una guerra civil generalizada en Colombia. El riesgo es que la persistencia e incluso el ahondamiento de este grave desarreglo social podría colocar en entredicho a mediano plazo la estabilidad institucional, tanto en el plano político como económico⁸.

Por ello, lo preocupante no es tanto que este tipo de visiones catastrofistas refleje las perspectivas reales de Colombia, sino que sirvan para alimentar las percepciones que tienen influyentes círculos políticos y militares en EEUU. Aun cuando en este momento el centro de decisiones sobre Colombia se ha

6. Cf. James Zackrisson y Eileen Bradley: «Colombian Sovereignty Under Siege» en *Strategic Forum* N° 12, 5/1997, Washington.

7. Pauline Baker y John Ausink: «State Collapse and Ethnic Violence: Toward a Predictive Model» en *Parameters. US Army War College Quarterly* XXVI(1), 1996, pp. 19-31.

8. Cf. los artículos de Daniel Pécaut («Colombie, un désastre annoncé» en *Le Monde*, 22/5/99) y de Jorge Castañeda («The Colombian Stalemate» en *Newsweek*, 19/4/1999).

desplazado del «zar antidrogas» hacia el Departamento de Estado, los núcleos de la derecha republicana en el Congreso y los *halcones* en el Pentágono y el Departamento de Guerra están pujando por ampliar su incidencia. Si en la actualidad predomina bajo la batuta del Departamento de Estado el apoyo a una salida negociada al conflicto interno, día a día crecen voces en Washington a favor de una salida de orden militar.

Política de doble carril

La creciente preocupación en los círculos políticos y militares de EEUU con respecto a la situación colombiana se traduce actualmente en la existencia de una política que podríamos denominar de «doble carril». Por un carril, por el momento dominante y bajo el impulso del Departamento de Estado, se está brindando un apoyo importante a las iniciativas de paz de la administración Pastrana. Una clara expresión de esta línea de conducta fue la reunión en Costa Rica entre el subsecretario de Estado para el Mundo Andino, Philip Chicola, y el responsable internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes. Por el otro carril, subordinado y bajo el impulso del Departamento de Defensa, se está buscando contribuir al fortalecimiento y reestructuración tanto de las fuerzas militares como de policía colombianas. La expresión más fehaciente de esta última política se encuentra en el acuerdo de cooperación firmado en Cartagena en diciembre de 1998 por el secretario de Defensa estadounidense, William Cohen, y el ministro de Defensa colombiano, Rodrigo Lloreda, durante la Tercera Conferencia Bianual de Ministros de Defensa de las Américas.

¿Cuáles son los ejes de este apoyo en el plano militar y policial? Como ya es de dominio público, Colombia entró a ocupar a partir de 1999 el tercer lugar en ayuda militar norteamericana en todo el mundo, luego de Israel y Egipto. Si bien oficialmente la ayuda bordeará este año los 300 millones de dólares, según el Center for International Policy, que dirige el ex-embajador en Paraguay y El Salvador, Robert White, podría alcanzar la suma de 400 millones debido a la utilización adicional de fondos especiales.

Ahora bien, a pesar del cambio de gobierno en Colombia –de Ernesto Samper a Andrés Pastrana–, los funcionarios norteamericanos reafirmaron hasta hace muy poco tiempo y de manera tajante que la lucha contra el tráfico de drogas seguiría siendo el tema central de la agenda bilateral entre Washington y Bogotá. Sostenían que el deseo del gobierno colombiano de «desnarcotizar» la agenda diplomática entre ambas naciones no era todavía viable y, por tanto, que la inmensa mayoría de la ayuda se iba a orientar hacia la lucha antinarcóticos y, por tanto, a la Policía Nacional. Sin embargo, lentamente se han ido abriendo las compuertas para una participación directa en la guerra de contrainsurgencia, a pesar de las resistencias de múltiples sectores en EEUU que rechazan un involucramiento de su país en la confrontación político-militar colombiana. Hoy en día, en influyentes medios académicos y militares de EEUU, el conflicto colombiano está siendo definido como una «gue-

rra ambigua» debido a los vínculos pragmáticos entre la guerrilla y el narcotráfico, lo cual está sirviendo de fundamento analítico para relacionar la guerra antinarcóticos y la guerra de contrainsurgencia. Como subrayaron distintos expositores en la reunión de Carlisle, si «existen vasos comunicantes entre la guerrilla y el narcotráfico, la guerrilla deberá asumir los costos»⁹.

Probablemente, el primer resultado de la noción de «guerra ambigua» como fundamento para una interconexión entre lucha antidrogas y lucha contraguerrillera fue la creación de un batallón del Ejército especializado en la lucha antinarcóticos compuesto por 1.000 hombres, helicópteros artillados y visores para el combate nocturno. El objetivo de este batallón –cuyo entrenamiento se haya en curso y cuya localización será la Base de Tres Esquinas en el sur del país– es, al menos sobre el papel, apoyar a la Policía Nacional en la erradicación de los cultivos de coca en el departamento del Putumayo, limítrofe con Ecuador y Perú. Este departamento reviste en la actualidad un valor geoestratégico fundamental tanto para los grupos paramilitares articulados en torno de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como para las FARC¹⁰. Entre los dos aparatos armados se han dividido el departamento y constituyen las únicas «autoridades» reales en la zona, en donde gracias a los extensos cultivos de coca y a la importancia de los laboratorios allí ubicados para su procesamiento están obteniendo la inmensa mayoría de sus recursos económicos. Por otra parte, dado que la frontera de Colombia con Ecuador y Perú en esta región era hasta hace poco un área sin control real de ninguno de los tres Estados fronterizos, se había convertido en un área favorable para el tráfico de drogas y de armas.

En las últimas semanas estamos observando un giro de 180 grados en la política de EEUU hacia Colombia. De la creación del Batallón Antinarcóticos para el Putumayo pasamos al borde de dar apoyo directo al Ejército para la guerra de contrainsurgencia. En palabras recientes del zar antidrogas, Barry McCaffrey,

Esta es una emergencia. Colombia está frente a una enorme crisis. Las FARC, el ELN y los paramilitares están atacando la democracia, en gran parte financiados por dineros provenientes del narcotráfico, y es nuestra responsabilidad darle al Ejército y a la Policía, los recursos que necesitan.¹¹

Es más: el propio McCaffrey le envió hace poco una carta a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, en la cual solicita la adición de 1.000 millones de dólares para la ayuda a los países andinos en la lucha antidrogas, de los cuales solo la mitad sería para el Ejército colombiano. Según afirmaron re-

9. Cf. Richard Downes: «Poder militar y guerra ambigua: el reto de Colombia en el siglo XXI» en *Análisis Político* N° 36, 1-4/1999, Bogotá.

10. En la parte alta del río Putumayo opera el Frente 48 de las FARC, responsable del manejo de los recursos provenientes de la coca para el sostenimiento de todo el Bloque Sur. El área de influencia de este Frente se extiende desde Puerto Asís hasta Monclart, casi 300 Km, en los cuales su dominio es total.

11. *El Tiempo*, 17/7/99.

cientemente fuentes de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, en una extensa entrevista publicada en el *Washington Post*, «como la guerrilla y los paramilitares controlan virtualmente toda la zona de producción de droga en el país, es casi imposible erradicar sin antes combatir con ellos. Y la policía, por más helicópteros que se le entregue, está limitada en su capacidad de combate. Este es un trabajo para el Ejército»¹².

La militarización de las fronteras. El valor geoestratégico que ha alcanzado la frontera sur del país para los diversos actores armados que desafían la autoridad oficial, explica la presión que ha venido ejerciendo el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Peter Romero, sobre los gobiernos de Ecuador y Perú a fin de trasladar sus tropas de la frontera común (luego de la guerra fronteriza) hacia los límites con Colombia. A lo largo de este año se han creado en el área unos «teatros de operaciones militares», similares a los que tiene desplegados el Ejército venezolano desde hace ya varios años. Sin duda, la ejecución en territorio venezolano de los tres indigenistas norteamericanos por las FARC, ahondó la preocupación regional con respecto a los temas de seguridad.

El traslado de las tropas de Ecuador y Perú responde, en primer término, a motivaciones internas. De un lado, se trata de aparatos militares macrocefálicos, desproporcionados con relación al tamaño, la población o la economía de ambos países, pero alimentados con el nacionalismo desmedido que produjo el conflicto fronterizo; por otra parte, se trata de instituciones que han tenido una larga tradición golpista. Por ello, tras la firma de los acuerdos de paz y la solución final de la disputa en la frontera, los gobiernos de Fujimori y Mahuad decidieron enviarlos a la zona limítrofe con Colombia no solo para mantener lejos de Lima y Quito a estos eventuales competidores en la arena política, sino para redefinir sus «hipótesis de conflicto», es decir, mantener vivo su papel estratégico en una y otra sociedad¹³. La conflictiva frontera colombiana se ha convertido en el pretexto ideal, lo cual no significa que se trate de una decisión tomada por simples razones domésticas. Sin duda, el tráfico de armas, drogas y precursores químicos ha crecido mucho en los últimos años. Asimismo, han aumentado los ataques de los grupos guerrilleros colombianos a las unidades militares de una y otra nación, y el traspaso

12. *El Tiempo*, 11/7/99.

13. Además, al menos en el caso de Fujimori los propios analistas peruanos consideran que, ante la inminencia de su tercera reelección –cuyo camino ya fue allanado dos años atrás mediante una reforma constitucional–, éste requiere romper el inflexible «techo de cristal» del 30% que constituye desde hace ya largo tiempo su margen de apoyo. Por otra parte, muchos analistas consideran que al haber escogido el Colegio Interamericano de Defensa como el escenario para lanzar su proyecto de militarización de la frontera, Fujimori quería mostrarle a Washington que era el aliado ideal para el combate contra las drogas y el terrorismo, a cambio de fondos para afrontar la grave crisis económica actual. De hecho, el ministro de Economía, Víctor Joy Way, se hallaba en esos mismos días en la capital estadounidense en diversas reuniones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Cf. Mariella Balbi y Marcela Sánchez: «Fujimori busca distraer la atención» en *El Espectador*, 9/2/99.

de la frontera tanto de paramilitares como de guerrilleros que consideran estas zonas débilmente pobladas como retaguardias seguras o áreas de descanso. Estas cuestiones estuvieron en el centro del debate durante la XVII Conferencia Internacional para el Control de Drogas que se llevó a cabo a fines de marzo de 1999 en Washington. Allí, Jorge Villarroel Merino, comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, afirmó que

estamos teniendo una infiltración pasiva bastante importante de la guerrilla y la narcoguerrilla en toda la frontera, en la provincia del Carche y de Esmeraldas. Un buen número de ellos se ha metido en el país, dan órdenes, imparten disposiciones, asesoran en materia de secuestros a técnicos de las zonas petroleras y usan a Ecuador como refugio. Para nosotros son un dolor de cabeza y por eso le hemos pedido ayuda a EEUU, para poder enfrentarlos con mejores argumentos.¹⁴

Es ya bien conocido que Fujimori, tras el anuncio del envío de tropas a la frontera común con Colombia (1.626 Km) en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington a principios de 1999, reunió urgentemente al Consejo de Defensa¹⁵ y delegó al oscuro e influyente asesor en asuntos de seguridad, Vladimiro Montesinos, esta tarea. Los débiles puestos de policía están siendo sustituidos, a lo largo del río Putumayo que separa ambas naciones, por importantes destacamentos militares en el marco de las «medidas estratégicas preventivas» anunciadas por Fujimori para contrarrestar el tráfico de drogas y las acciones guerrilleras¹⁶.

Un proceso de militarización similar se está produciendo en las fronteras con Panamá y Brasil, aun cuando en uno y otro caso se trata de respuestas a dos contextos muy singulares. En el caso de Panamá, se halla en juego ni más ni menos que el futuro retiro de las tropas norteamericanas de las bases que todavía mantienen en este país. Recientemente, en explosivas declaraciones el general Charles Wilhem afirmó públicamente que Panamá no estaba en capacidad de garantizar la seguridad del Canal, ante la creciente presencia de las FARC en la frontera. Declaraciones que fueron interpretadas como un mensaje explícito de Washington de su deseo de mantener tropas estacionadas en el istmo¹⁷. Como reacción, el gobierno panameño ha enviado

14. «FARC, amenaza para la región» (*El Tiempo*, 28/4/99). En esta misma reunión, Barry McCaffrey afirmó que las FARC no solo eran «una amenaza para las instituciones democráticas colombianas, sino también para todos en la región», y el director de la DEA, Thomas Constantine, concluyó afirmando que «todo el mundo en la región está muy preocupado por las actividades de las FARC». Recientemente, el presidente Fujimori en una extensa entrevista sostuvo que la guerrilla colombiana constituye una «amenaza continental» (*El Espectador*, 11/7/99).

15. Este consejo está integrado, además del mandatario, por los ministros de Defensa y del Interior, así como por el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

16. El ex-ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Lloreda, como reacción a la sorpresiva decisión de Fujimori planteó la necesidad de conducir esta presencia militar dentro de unos acuerdos de cooperación «como los que actualmente tenemos con Venezuela, que funcionan muy bien y que permiten en un momento dado extender esa cooperación no solamente a nivel de la Policía sino también del Ejército para controlar mejor la frontera y evitar que pueda utilizarse con fines de perturbación institucional» (*El Espectador*, 9/2/99).

17. Pocos meses antes, el presidente del Subcomité de Justicia Criminal y Políticas Antidrogas de la Cámara de Representantes había afirmado que estaba «francamente preocupado por-

a la zona más de 1.500 miembros de la Policía Nacional, con el objeto de mostrar su capacidad de garantizar con eficacia la seguridad. La preocupación de la Casa Blanca nace también de los costos para la política antinarcoóticos del cierre este año de la Base Aérea Howard, localizada en Panamá, dado que desde las bases sustitutivas de Aruba, Curazao y Ecuador sólo se podrán llevar a cabo la mitad de los 15.000 vuelos antidrogas (para erradicación e interdicción) que se efectuaban hasta entonces¹⁸. En el caso de Brasil, se trata de un problema relacionado más con el tráfico de drogas que con la presencia de la guerrilla, lo cual se está traduciendo en el fortalecimiento de la base militar de Tabatinga sobre el río Amazonas, al sur de Colombia, y en el programa en curso de instalación de radares a lo largo de la frontera común.

¿Además de la guerrilla y los traficantes de drogas, existe también la presencia de paramilitares de origen colombiano? La respuesta es todavía prematura, a pesar de múltiples indicios aquí y allá. En Venezuela, desde octubre de 1996, de manera extraoficial se viene hablando del tema. En aquel mes, una unidad investigativa de *El Nacional*, de Caracas, reseñó una denuncia realizada ante el Ministerio del Interior por el presunto entrenamiento de grupos paramilitares en el municipio Libertador del estado Mérida. Posteriormente, el propio jefe de las AUC, Carlos Castaño, afirmó que desde 1997 ante la constante presión de la guerrilla en la frontera, 140 comerciantes y ganaderos de la zona del Alto Apure, Zulia y Barinas, lo llamaron para organizar comandos de autodefensa. En cuanto a Ecuador, basta recordar el supuesto o real «Frente Militar de Apoyo Internacional» que se adjudicó el asesinato del diputado Jaime Hurtado y que habría contado con el apoyo de las AUC. Cierto o falso, está comprobado que al menos los autores materiales que asesinaron al destacado dirigente de la izquierda maoísta provenían de Colombia¹⁹.

Conclusión

¿Estamos *ad portas* de un escalamiento de la ayuda militar de EEUU en Colombia? ¿Podrá ésta conducir a mediano plazo, si se rompen las negociaciones de paz con las FARC y se agudiza el conflicto interno, a una intervención directa? Con respecto a la primera pregunta, sin duda vamos a presenciar en los próximos meses un acrecentamiento de la ayuda militar. Ya Peter Romero anunció hace pocos días que EEUU no se va a limitar al entrenamiento del Batallón Antinarcoóticos, sino que va a entrenar varios miles de soldados. Asimismo, Charles Wilhem anunció el apoyo al Ejército en la guerra de contrainsurgencia con intercambio de inteligencia.

que las FARC ... puedan crear una situación más inestable en Panamá y que EEUU tenga que regresar a Panamá en un futuro, con grandes costos y sacrificios, para preservar la seguridad del Canal y proteger nuestros intereses nacionales» (*El Espectador*, 5/5/99).

18. *Ibíd.*

19. *El Espectador*, 17/5/99.

Desde mi perspectiva creo que, al menos a corto plazo, la política de EEUU va a continuar bajo los tres ejes mencionados: en primer término, a pesar del escepticismo creciente en muchos círculos de poder en Washington, se mantendrá el respaldo a la política de paz del presidente Pastrana; en segundo término, es previsible un aumento significativo de la ayuda militar no solo para la guerra antinarcóticos sino de manera creciente para la de contrainsurgencia; y, por último, persistirá una fuerte presión sobre los países vecinos para que ahonden el «cordón sanitario» en torno de Colombia.

¿Podrá conducir este escalamiento a una intervención directa de la Casa Blanca bajo la modalidad, por ejemplo, de un ejército interamericano? En muchos documentos conocidos del establecimiento militar norteamericano se contempla este escenario como probable en caso de un inminente «colapso total del Estado»²⁰. La mejor evidencia han sido las constantes reuniones («oficiosas y no oficiales») entre miembros del gobierno argentino y delegados del gobierno norteamericano.

Colombia se halla, pues, en una grave encrucijada: o se avanza en la solución negociada al conflicto armado —que es el escenario deseable y menos costoso para el país— o vamos a presenciar un escalamiento infernal de la conflagración interna con una creciente presencia de actores externos.

Bogotá, julio de 1999

20. Lo más grave es que, de acuerdo con una encuesta de opinión realizada recientemente en Colombia, el 67% se mostró favorable a una eventual intervención militar de EEUU. El escepticismo con respecto a la voluntad real de paz de las FARC y el ELN, así como la exasperación creciente frente a la violencia política, pueden explicar esta actitud.